

C.A. de Rancagua

Rancagua, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno.

Vistos:

I.- En cuanto al recurso de casación en la forma.

1º) Que el abogado Felipe Murillo Valderrama, en representación de la demandada Magdalena Trujillo Ávila recurre de casación en la forma en contra de la sentencia de primer grado por la causal de contener la sentencia decisiones contradictorias, pues, en su concepto, de la mera lectura de la sentencia existe una evidente contradicción entre la parte considerativa del fallo y lo resolutive del mismo, cuando en el motivo vigésimo segundo razona sobre la existencia de culpa en los demandados, específicamente con relación a los miembros del directorio del Comité, Baltazar Barrios Reyes, Jorge Necochea Meneses y Magali de las Mercedes Urzúa Pulgar, por no velar por el cumplimiento de la normativa que los regula y actuar con falta de diligencia y cuidado, lo que conllevó la existencia de pérdidas económicas para la organización, lo que le hace concluir la relación de causalidad entre la acción u omisión de los demandados precedentemente señalados y el daño producido.

2º) Que seguidamente la casación intentada hace referencia al motivo vigésimo tercero en que la sentenciadora trata la situación de la demandada Magdalena Rosa Trujillo Ávila, en que determina, al valorar el contrato de trabajo que ella posee como administradora del Servicio de Agua Potable Rural, hacer aplicación a su respecto del artículo 2322 del Código Civil y estimar no hacerla responsable civilmente y rechazar la demanda en lo que a ella concierne.

3º) Que, ahora bien, la contradicción denunciada emana justamente porque la parte resolutive de la sentencia condena a Magdalena Trujillo, administradora del Comité, y a los otros dos miembros del mismo, Baltazar Barrios y Jorge Necochea, y rechaza la acción intentada respecto de Magali de las Mercedes Urzúa Pulgar, por



no haberse acreditado los requisitos de procedencia de la acción interpuesta en su contra.

4º) Que, sin perjuicio del evidente error develado, corresponde rechazar la casación en la forma intentada, sustentada en el artículo 768 N° 7 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto que la sentencia contenga decisiones contradictorias, pues de su mera lectura se comprende que se trata de un defecto formal de referencia de la parte resolutive del fallo, pues es claro que en las consideraciones del mismo, se explican las motivaciones y fundamentos destinados a liberar de responsabilidad a quien era la administradora del Comité de Agua Potable, es decir, doña Magdalena Trujillo Ávila y no precisamente a Magali Urzúa Pulgar, miembro del directorio, a cuyo respecto se aplican las mismas razones que se dieron para acoger la demanda en el caso de Baltazar Barrios y Jorge Necochea.

Por lo anterior, es claro que lo denunciado en el recurso se trata de un simple error de referencia y no de una decisión contradictoria propiamente tal, lo que, en todo caso, puede ser subsanado por esta Corte al conocer los recursos de apelación deducidos en contra del fallo, por lo que este tribunal posee mecanismos para enmendar el defecto denunciado, de conformidad al artículo 768 inciso tercero del Código de Procedimiento Civil.

II.- En cuanto a los recursos de apelación presentados.

Se reproduce la sentencia apelada, con excepción de los considerandos décimo séptimo al vigésimo séptimo, los que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

5º) Que, en primer lugar, queda patente como defecto de la acción intentada por la actora en su libelo principal, que dicha parte perseguía en *autos* la responsabilidad extracontractual de todos los demandados, sin diferenciar la situación de la administradora del Comité de Agua Potable doña Magdalena Rosa Trujillo Ávila, con quien justamente el mentado Comité, poseía un vínculo contractual previo, acreditado conforme a la prueba documental acompañada,



consistente en contrato de trabajo de 28 de septiembre de 2009, celebrado entre el Comité de Agua Potable El Vaticano-Las Mercedes, representado legalmente por su presidente Jorge Nechochea Meneses y Magdalena Trujillo Ávila, y además, su respectivo anexo celebrado, de fecha 14 de junio de 2011, en donde ésta última se comprometía a ejecutar labores de administradora del Servicio de Agua Potable Rural y se describían las funciones administrativas, contables y técnicas que le correspondía desarrollar dentro del ámbito de sus labores.

Entonces, tal realidad de hecho y jurídica, exigía diferenciar su caso respecto del resto de los demandados, pues lo que correspondía era determinar la concurrencia o no de los requisitos de procedencia de la responsabilidad contractual, sabemos con un *onus probandi* diverso de la responsabilidad aquiliana, y no de aquella pretendida en la demanda, lo que no pudo efectuarse dado el tenor de la misma, y que lleva a concluir su rechazo desde ya, al haberse intentado equívocamente la persecución de indemnización bajo un estatuto jurídico que no le correspondía a Magdalena Trujillo.

6º) Que, sin perjuicio de lo anterior y analizando el mérito de la acción intentada por responsabilidad extracontractual en contra de todos los demandados, es decir, Baltazar Barrios Reyes, Magdalena Trujillo Ávila, Jorge Necochea Meneses y Magali Urzúa Pulgar, ésta se sustenta en haber incurrido en negligencia en el ejercicio de sus cargos, y en el desarrollo de sus labores, en innumerables y graves irregularidades, favoreciendo y dando lugar a la ocurrencia de pérdidas, perjudicando y comprometiendo el funcionamiento del Comité de Agua Potable Rural El Vaticano Las Mercedes, incumpliendo con ello culpablemente las obligaciones legales, reglamentarias y estatutarias a las que se encontraban sujetos.

7º) Que en dicho contexto, y al encontrarnos sujetos al estatuto de la responsabilidad extracontractual, regulado desde los artículos 2314 a 2334 del Código Civil, que trata “De los delitos y cuasidelitos”, correspondía al demandante acreditar que el perjuicio ocasionado era



imputable a la culpa de los demandados, es decir, debía probar que a partir de un ejercicio negligente en las funciones y tareas encomendadas se ocasionaron pérdidas, lo que perjudicó el funcionamiento del Comité de Agua Potable Rural El Vaticano Las Mercedes.

8º) Que es pertinente por tanto, traer a colación lo que sostiene el profesor Hernán Corral Talciani, cuando analiza los requisitos de la responsabilidad extracontractual o aquiliana, en cuanto a que: “...en primer lugar, se necesita que el hecho o acto sea originado en la voluntad del ser humano” y agrega “...a continuación, debe exigirse que ese hecho voluntario contraste con el derecho, es decir, sea injusto o ilícito desde un punto de vista objetivo (contraste entre conducta y las normas y principios del ordenamiento)” y agrega que “ Al hecho voluntario antijurídico debe añadirse el que haya efectivamente causado daño (nocividad), requisito que se desdobra en dos: el daño propiamente tal y el vínculo causal entre el hecho ilícito y el perjuicio (causalidad)”, para finalmente destacar que no basta lo anterior, pues “...es necesario que el hecho sea subjetivamente antijurídico, es decir, que sea reprochable o imputable a una persona... (siendo) las formas de imputación ordinaria el dolo y la culpa”.

Por tanto, para Corral Talciani, “la responsabilidad civil surge cuando puede verificarse un hecho voluntario, ilícito, imputable que ha sido la causa de un daño a las personas” y que “es necesario que el daño provenga de un comportamiento objetivamente ilícito, contrario al ordenamiento jurídico, contrario a lo justo”, por lo que la valoración de la ilicitud de un comportamiento puede fundarse en una infracción a un deber legal expreso o en la transgresión del principio general de que no es lícito dañar sin causa justificada a otro. (Todas las citas precedentes en: *“Lecciones de Responsabilidad Civil Extracontractual”, pág. 119, Editorial Legalpublishing, 2a edición actualizada, año 2013*).



9º) Que de esta manera, es posible concluir, que los requisitos de procedencia de la responsabilidad extracontractual, son los siguientes: a) la capacidad del agente; b) la existencia de una acción u omisión ilícita del mismo; c) la culpa o dolo de su parte; d) el perjuicio o daño a la víctima; d) la relación de causalidad entre el referido comportamiento activo o pasivo, culpable o doloso y el daño producido; y por último, e) que no concurra una causal de exención de responsabilidad.

10º) Que, en primer término, no habiéndose debatido respecto de la capacidad de los demandados para cometer delito o cuasidelito civil y no constando en *autos* alguna causal de incapacidad que les afecte, sin mayores disquisiciones se tendrá por satisfecho el primer elemento de la responsabilidad aquiliana.

11º) Que, ahora bien, en cuanto a los demás requisitos de procedencia de la responsabilidad extracontractual, baste con referirse a aquel vinculado a la existencia de una acción u omisión ilícita de parte de los demandados y la presencia de culpa o negligencia en el despliegue de sus actuaciones dentro del Comité de Agua Potable, para estimar que conforme a la prueba rendida, ellos no aparecen acreditados, lo que desde ya impide acoger la acción intentada y que determina como innecesario el tratamiento de los demás elementos referidos en el motivo noveno precedente.

12º) Que así las cosas, para la comprobación de una acción u omisión ilícita de parte de los demandados, la prueba documental ingresada consistió en sendos informes de auditorías del Servicio de Agua Potable Rural El Vaticano, referidos a los períodos 2011-2013-2014, así como el informe de auditoría operacional de los años 2011 a 2014.

En efecto, en primer término, sobre el informe de auditoría operacional de los años 2011 a 2014, elaborado por el Contador Auditor don Santiago Bravo Zúñiga, es menester concluir que, a pesar del mérito de las conclusiones afirmadas en dicho estudio, tal



instrumento, al ser de carácter privado, para tenerse por reconocido y poder ser valorado, necesariamente debía ser reconocido en juicio por la persona a cuyo nombre aparecía otorgado, tal y como lo previene el artículo 346 N° 1 del Código de Procedimiento Civil y como resulta evidente, tal efecto nunca pudo darse en la especie, si se considera que justamente el testigo Bravo Zúñiga fue tachado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 358 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, siendo la tacha acogida y por cierto, tal inhabilidad, impedía otorgar mérito al documento denominado “auditoría operacional de los años 2011 a 2014” y a todas las conclusiones contenidas en él.

13º) Que, en segundo lugar, con respecto al informe final de auditoría Servicio Agua Potable El Vaticano, periodo 2014, confeccionado el 26 Marzo del año 2015, éste aparece ser de autoría de Ricardo Ahumada G. y Denisse Aránguiz P., sin embargo, este instrumento de carácter privado, en la prueba testimonial que consta a folio 62 del proceso, no fue reconocido como suyo por parte del testigo Ahumada, quien explicitó que reconocía como suyo únicamente el informe final de auditoría Servicio Agua Potable Rural El Vaticano Las Mercedes, periodo 2011-2013, de fecha 19 de enero de 2015 y no así el Informe Final de auditoría precitado, correspondiente al periodo 2014, de 26 de Marzo de 2015, respecto del cual agregó que lo realizó otro profesional, sin especificar quien, al no señalar su nombre.

Por lo demás, la otra profesional que aparece mencionada en el estudio, que abarca el periodo del año 2014 y que se realizó el 26 de Marzo de 2015, es Denisse Aránguiz, y en su caso, ella ni siquiera compareció a estrados a prestar declaración, con lo cual, el instrumento antes mencionado, al tratarse de un documento privado, que no ha sido reconocido, incumple nuevamente lo dispuesto en el artículo 346 N° 1 del Código de Procedimiento Civil, que de acuerdo a las normas que regulan la prueba en materia civil impide otorgarle valor por no haber sido reconocido y, por ende, no puede ser considerado como probanza idónea que sirva para sustentar la existencia de una acción,



y en el caso de *autos*, de una omisión ilícita de parte de los demandados y menos sirve para comprobar la presencia de culpa o negligencia en sus actuaciones dentro del Comité de Agua Potable, misma situación que concurre -como ya se refirió precedentemente- respecto del informe de auditoría operacional de los años 2011 a 2014, elaborado por el Contador Auditor Santiago Bravo Zúñiga, quien fue declarado inhábil en este proceso a través de la tacha.

14º) Que, finalmente, si bien el denominado informe final de auditoría Servicio Agua Potable Rural el Vaticano -Las Mercedes 2011-2013, confeccionado el 19 de enero de 2015, fue reconocido como propio por don Ricardo Ahumada González, el mérito de su declaración como testigo, recibida el 14 de septiembre de 2018, a folio N° 62, no resultó lapidaria ni categórica en cuanto a la información incorporada para determinar la existencia de irregularidades en la conducta de los demandados que supusieran la comprobación de omisiones culpables de carácter ilícito que les fueran imputables a un proceder negligente dentro del Comité.

En efecto, el testigo Ahumada González si bien señala que el Comité de Agua Potable Rural El Vaticano-Las Mercedes, sufrió perjuicios a raíz del actuar de los demandados, explica que luego de hacer la auditoría pudo establecer que no se cumplió con la normativa en el manejo financiero que debía hacer el Comité, pues *supone* que el Tesorero con el Presidente son los encargados de firmar los cheques, y la secretaria es la que visa la información y los cheques. Posteriormente agrega que se produjo un **desorden administrativo** al interior de dicha organización, produciéndose que los ingresos no fueran depositados en tiempo ni oportunidad, realizando gastos sin ningún respaldo (el resaltado es nuestro).

Entonces, dos son las afirmaciones que realiza, primero, supone una asignación de tareas y responsabilidades en los demandados, lo que es relevante, pues se trata justamente de imputar actuar negligente a personas determinadas, y por tanto se carece de aquel requisito de la



responsabilidad extracontractual que importa necesario que el hecho sea subjetivamente antijurídico, es decir, que sea reprochable o imputable a una persona, las formas de imputación ordinaria el dolo y la culpa, y en segundo término, califica la situación del Comité de “desorden administrativo”, lo mismo que puede desprenderse del extenso informe por él realizado, lo que dista de representar una actuación, y más bien una omisión en este caso, que posea un carácter ilícito.

Por lo demás, el mismo deponente refiere que existieron “giros de platas que no se sabe dónde fueron a parar e indicó que comprobó que la administradora del Comité, la Sra. Magdalena Trujillo Ávila, manejó la suma de \$98.000.000 en dinero, sin estar depositados y como lo pude establecer, hubo un faltante de alrededor de \$ 64.000.000” y añade que: “todo lo que acabo de declarar está reflejado en el informe de auditoría que se emitió a la organización en su oportunidad” e incluso afirma categóricamente que ***“yo diría que hay muchos gastos que se hicieron sin conocimiento de la directiva propiamente tal”***(lo remarcado es nuestro).

Tal indeterminación fáctica en la tareas también es refrendada por la deponente Verónica Troncoso Vergara (consta en el folio N° 62 de la prueba testimonial) quien señaló que doña Magdalena Trujillo tenía muchas facultades que los demás miembros del directorio le fueron delegando.

Y entonces; ¿Cómo poder determinar responsabilidad específica con respecto a cada uno de los demandados, si incluso manifiestan existen operaciones que no estaban en conocimiento en parte de ellos mismos? Lo cierto es que no puede arribarse a una conclusión así de específica y determinada, primero, porque como ya se dijo no se encuentra comprobado el presupuesto básico de la responsabilidad extracontractual, en cuanto a la existencia de una omisión ilícita, sino que más bien un desorden administrativo y financiero, y segundo, porque la culpa o negligencia está referida a actuaciones determinadas



y no a imputaciones genéricas como es lo que la escuálida prueba determina.

Todo lo dicho fluye del mérito del informe referido en el párrafo primero de este motivo, que en la página 4º del mismo concluye la existencia de un desorden contable y financiero, mas no define en forma concluyente que se haya estado frente a un actuar con culpa de los demandados en el ejercicio de sus tareas, con la comisión de graves irregularidades que hubieren favorecido y dado lugar a la ocurrencia de pérdidas, que perjudicaran y comprometido -por ese motivo- el funcionamiento del Comité de Agua Potable Rural El Vaticano Las Mercedes, tal y como se pretendía en libelo principal del actor, escenario en el cual se produce una insuficiencia probatoria -como se dirá en el considerando venidero- todo lo cual, impide acoger la demanda.

15º) Que conforme a lo razonado y establecido en el considerando anterior, la declaración del deponente Ricardo Ahumada González, no puede ser ponderada al tenor de lo dispuesto en el artículo 384 N° 1 del Código de Procedimiento Civil, es decir, como una testimonial que constituya una presunción judicial cuyo mérito probatorio sea apreciado en conformidad al artículo 426 del cuerpo legal precitado, es decir, que en el caso de tratarse de una presunción judicial, de acuerdo al artículo 1712 del Código Civil, sea de tal gravedad, precisión y concordancia, que pueda elevarse la misma a una presunción que constituya plena prueba, cuando ella reúna caracteres de gravedad y precisión suficientes para formar el convencimiento necesario en el tribunal- tal y como lo dispone el inciso segundo del artículo 426 del código adjetivo civil-, todo lo cual justamente no ha ocurrido en la especie, pues como se ha referido en el motivo décimo cuarto, la declaración del testigo Ahumada González no posee mérito para dar por comprobado ni la existencia de omisiones ilícitas de parte de los demandados y tampoco la presencia de culpa o negligencia en su actuar particular, deficiencia que también se encuentra en el



informe que él realizó, cuyos fundamentos de su desestimación han sido expresados con anterioridad.

16º) Que, por último, no existe probanza de otro tipo que mejore o modifique el escenario de insuficiencia probatoria develado que permitan subvertir lo ya concluido.

Por estas consideraciones y lo dispuesto, además, por los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara:

A.- Que, se rechaza el recurso de casación en la forma intentado por el abogado Felipe Murillo, en representación de la demandada Magdalena Rosa Trujillo Ávila.

B.- Que, se **REVOCA**, en lo apelado, la sentencia definitiva de fecha trece de abril de dos mil veinte, pronunciada por el Primer Juzgado Civil de Rengo, en los autos Rol C-585-2017, en cuanto acogió la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual y, en su lugar, se resuelve, que **se rechaza la referida demanda en todas sus partes**, interpuesta con fecha 05 de julio de 2017, respecto de Baltazar Antonio Barrios Reyes, Magdalena Rosa Trujillo Ávila, Jorge Eduardo Necochea Meneses y Magali de las Mercedes Urzúa Pulgar.

C.- Que no se condena en costas a la actora, por haber tenido motivos plausibles para litigar.

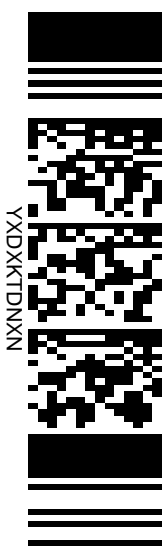
D.- Que se confirma en todo lo demás, la sentencia de primer grado.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del Fiscal Judicial Sr. Joaquín Ignacio Nilo Valdebenito.

Rol Corte N° 1157-2020.Civil.-





YDXKTDNXN

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Rancagua integrada por los Ministros (as) Pedro Salvador Jesus Caro R., Michel Anthony Gonzalez C. y Fiscal Judicial Joaquin Ignacio Nilo V. Rancagua, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno.

En Rancagua, a diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

